



COMO CITAR ESTE ARTÍCULO:

Zambrano-Quintero, L. (2020). Espejos internacionales para la comprensión del tránsito de las FARC-EP a partido político. *Revista Jurídicas*, 17(2), 240-261. <https://doi.org/10.17151/jurid.2020.17.2.13>

Recibido el 15 de enero de 2020
Aprobado el 18 de mayo de 2020

Espejos internacionales para la comprensión del tránsito de las FARC-EP a partido político

LILIANA ZAMBRANO-QUINTERO* |

RESUMEN

La transformación de grupos rebeldes en partidos políticos es un elemento clave para la sostenibilidad de la paz. Se trata de un proceso complejo en el que intervienen múltiples factores cuyo resultado varía de un caso a otro. Este artículo se pregunta por las condiciones que intervienen para que dicho tránsito a la vida política legal sea más o menos exitosa. Para ello se hace una revisión de literatura de otras experiencias en el mundo que ya han atravesado por esta transición, con el fin de identificar los factores que han influido en la variedad de resultados y extraer de ellos recomendaciones útiles para el reciente caso de las FARC-EP en Colombia.

PALABRAS CLAVE: transformación política, FARC-EP, grupo rebelde, partido político.

* Ph.D. en Derechos Humanos. Profesora Universidad de Deusto, España. Consultora internacional en paz y conflictos. E-mail: lilianazambranoq@gmail.com.
Google Scholar. ORCID: 0000-0003-3513-4685.



International mirrors for understanding the transition from FARC-EP to a political party

ABSTRACT

The transformation of rebel groups into political parties is a key element for the sustainability of peace. It is a complex process in which multiple factors intervene and whose result varies from case to case. This article inquires about the conditions that intervene for said transition to legal political life to be more or less successful. For this purpose, a literature review of other experiences in the world that have already gone through this transition is carried out in order to identify the factors that have influenced the variety of results and to draw from them useful recommendations for the recent case of the FARC-EP in Colombia.

KEY WORDS: political transformation, FARC-EP, rebel group, political party.

Introducción

De los 216 acuerdos de paz incluidos en el *Peace Agreement Dataset* de la Universidad de Uppsala, 196 corresponden a acuerdos para finalizar conflictos armados internos que involucran a 93 grupos armados no-estatales. El 15 % de los acuerdos incluyeron consideraciones específicas para que los rebeldes se transformaran en partidos políticos y un 35 % de los grupos lograron completar su transformación e incorporación a la vida política legal (Söderberg & Hatz, 2016). Aunque en la mayoría de las negociaciones no se considera dicha conversión, los estudios sobre la materia señalan que cuando la transformación se contempla y es además exitosa, ello se convierte en un aspecto clave para la sostenibilidad de la paz (De Zeeuw, 2008; Lyons, 2005).

El caso más reciente de transformación ha sido la experiencia en Colombia de las FARC-EP. Tras cuatro años y medio de conversaciones que concluyeron con la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, el 1 de septiembre de 2017 la otrora insurgencia se constituyó oficialmente en partido político bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). A la fecha ha participado en las elecciones legislativas y presidenciales del 2018, así como en las territoriales de octubre del 2019. Aunque los resultados electorales no han sido favorables, producto de los acuerdos tiene garantizados cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes por dos períodos constitucionales, de manera que como mínimo tendrá presencia en el escenario democrático hasta 2026.

Su tránsito a la legalidad no ha estado exento de dificultades. Las FARC tiene por delante un largo recorrido en el que deberá hacer frente a las vicisitudes de la transición y ver si logra consolidarse como un partido político viable a lo largo del tiempo. Este artículo se pregunta por las condiciones necesarias para que dicha transformación sea más o menos exitosa. Para ello, se hace una revisión de literatura de otras experiencias que ya han atravesado por este tipo de procesos y se estructuran los factores que se han utilizado para explicar la variedad de resultados de manera que sean útiles para la comprensión del caso colombiano.

I. Transformación política

La transformación de grupos rebeldes a partidos políticos es entendida como una cadena de cambios de diferentes etapas que no necesariamente tienen lugar en un orden específico, sino que pueden ocurrir de manera paralela y solapada (Dudouet, Planta & Giessmann, 2016). Hace parte de la serie de ajustes políticos, económicos y sociales propios de un contexto de transición de la guerra a la paz. Es un proceso que requiere de tiempo no solo para superar las tensiones y construir confianza entre los diferentes actores, sino también para que los movimientos rebeldes que se transforman adquieran las destrezas y herramientas necesarias para atraer el apoyo

electoral y sobrevivir en la arena política legal (De Zeeuw, 2008). Esto supone tanto la renuncia a la fuerza y la aceptación de las reglas básicas de la competencia democrática, como la adecuación o apertura del sistema político para que se favorezca esa inclusión política.

Mimmi Söderberg (2007) señala que la esencia de la transformación de rebeldes a políticos recae en el cambio de medios de lucha: de medios violentos a medios no violentos, de las armas a los votos; y en el cambio de arena de lucha: de operar fuera del sistema a actuar dentro del marco político legal existente. Adicional a ello sostiene que para considerar que la transformación sea completa, el grupo rebelde no solo debe abandonar de manera definitiva la lucha armada y continuar la lucha política por vías exclusivamente democráticas, sino que además debe ser capaz de sostenerse como partido político activo a lo largo del tiempo.

Los estudios comparados que se han hecho sobre la materia demuestran que no siempre los cambios se producen de manera consecutiva o en su totalidad, de ahí que los resultados entre una experiencia u otra puedan tomar diferentes vías. En concreto, Jeroen De Zeeuw (2008) habla de cuatro tipos de transformación: “exitosa”, “parcial”, “fallida” y “de fachada”. Según él, en algunos casos los antiguos rebeldes emergen como partidos políticos durante el período de la posguerra, mientras otros no lo intentan, no logran obtener un resultado exitoso o no completan dicha conversión.

Una transformación *exitosa* es aquella en la que el grupo rebelde abandona de manera definitiva la lucha armada, completa su proceso de desarme y desmovilización y se constituye en un partido con un programa político claro, capaz de seleccionar candidatos y participar en elecciones, acceder a cargos públicos y asumir responsabilidades de gobierno (Dudouet, Planta & Giessmann, 2016). El éxito se mide en función de los votos y escaños obtenidos en las elecciones (Allison, 2006), así como por sus posibilidades de sostenerse a lo largo del tiempo bien sea como partido de gobierno o como fuerza de oposición (Söderberg, 2007). Se mencionan como exitosas las experiencias del Congreso Nacional Africano (ANC/MK) en Sudáfrica (Dudouet, 2009; Maharaj, 2008; Dudouet, Planta & Giessmann, 2016), la Resistencia Nacional Mozambiqueña (RENAMO) (Lyons, 2005; Manning, 2007; Söderberg, 2007), el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador (Allison, 2006; Manning 2007; Dudouet, Planta & Giessmann 2016; Rampf *et al.*, 2014) y el Partido Comunista de Nepal – Maoísta (CPN-M) (Ogura, 2008; Castillejo, 2016).

La transformación *parcial* es el tipo más común, particularmente en los primeros años de finalizado el conflicto. Los rebeldes reconocen que tienen que adoptar nuevas estrategias político-militares para ser parte de la vida política legal, pero consideran que aún no están dadas las condiciones estructurales suficientes para

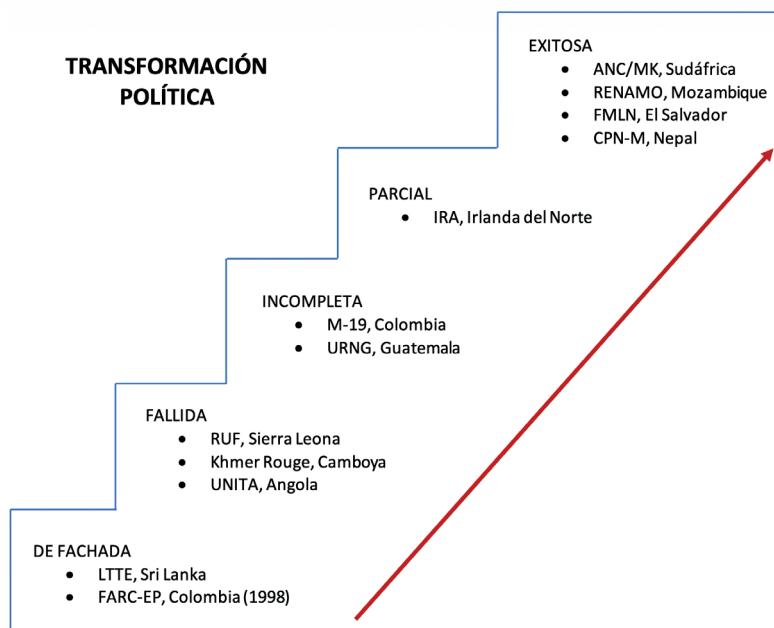
abandonar del todo la lucha armada. El temor a que puedan ser aniquiladas militarmente o perder políticamente si los otros actores juegan en su contra, los lleva a argumentar la necesidad de mantener unidades armadas de reserva por si las cosas no van bien. El resultado es una combinación de lo político con lo militar tal como sucedió con el IRA en Irlanda del Norte durante los primeros años de pacificación (De Zeeuw, 2008; García-Durán, 2009; Dudouet, Giessmann & Planta, 2016).

La transformación es *incompleta* cuando los grupos rebeldes intentan su transformación a partido político, pero no logran sobrevivir en la arena electoral, no logran llegar al gobierno ni asumir un rol de oposición. Al cabo de un tiempo terminan desapareciendo del escenario político, aunque tampoco retornan a la vía armada. El éxito no solo depende de la voluntad del grupo para transformarse, sino también de su capacidad para desarrollar recursos políticos, económicos, técnicos y humanos que garanticen su supervivencia (Söderberg, 2007). La desmilitarización es efectiva, aunque la consolidación como partido no resulta posible. Dos ejemplos claros son los casos del M-19 en Colombia (Flórez y Valenzuela, 1996; García-Durán, 2009; Rampf, *et al.*, 2014) y de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (Allison, 2006; Nasi, 2007).

La transformación es *fallida* si el grupo inicia procesos de cambio actitudinales, pero carece de estructuras organizacionales, de recursos o de apoyo popular para establecerse como partido político. Puede darse por una derrota militar o por el colapso interno producto de fragmentaciones (De Zeeuw, 2008). En algunos casos, se produce una ruptura de los acuerdos de paz, el grupo retoma las armas y la violencia e inestabilidad se mantiene. En otros, el grupo muta hacia formas de organización criminal o termina desapareciendo. Es el caso de Khmer Rouge en Camboya (Lyons, 2005; Söderberg, 2007), del Frente Revolucionario Unido (RUF) en Sierra Leona (Söderberg, 2007) o de UNITA en Angola (Lyons, 2005).

Finalmente, las transformaciones de *fachada* son aquellas en las que el grupo rebelde no solo falla en implementar los principales cambios organizacionales (aparte de los pocos que puedan darse desde un punto de vista cosmético), sino que no quiere cambiar la naturaleza de su toma de decisiones o las estrategias que emplea. Generalmente usan la retórica de la negociación como pretexto para continuar recibiendo dinero y apoyos, o para crear estructuras políticas que les sirvan como “frentes” para sus milicias armadas. En realidad, el grupo no está interesado en convertirse en un partido político sin armas, al menos no en el corto plazo. El resultado es un movimiento que subordina las estructuras políticas a los propósitos militares y la transformación no tiene lugar. Los estudios ubican en este grupo a los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) en Sri Lanka y la experiencia de las FARC-EP durante las conversaciones de paz en San Vicente del Caguán (1998-2002) (De Zeeuw, 2008).

Gráfica 1. Transformación política.



Fuente: elaboración propia a partir de los autores citados

2. Espejos internacionales de la transición

La diversidad de resultados de la transformación demuestra que no todos los grupos rebeldes optan por convertirse en partidos políticos, no todos lo hacen como resultado de un proceso negociado y no todos acuerdan consideraciones específicas sobre este punto en los acuerdos de paz. Así mismo, aquellas experiencias que lo intentan tampoco recorren caminos similares, ni producen resultados análogos. Es por ello que gran parte de los estudios sobre la materia se han centrado en identificar cuáles son los elementos que sirven para explicar por qué la transformación de un grupo rebelde a partido político es exitosa en unos casos y en otros no.

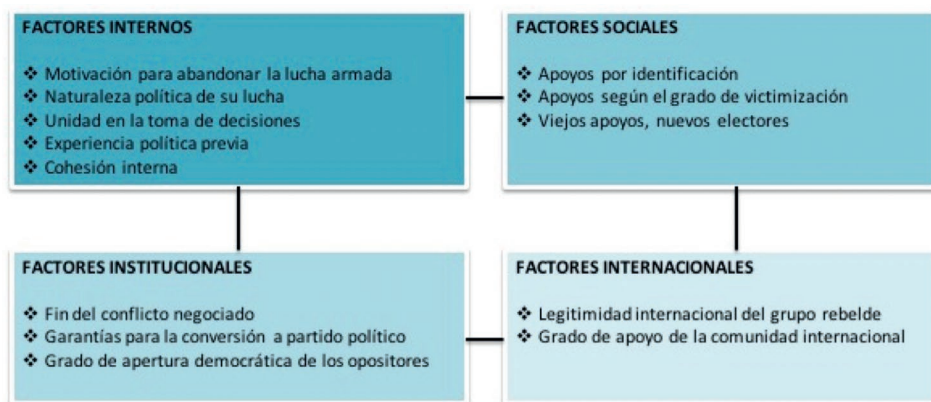
Tabla 1. Factores explicativos.

Autores	Factores
manning 2004; 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores Institucionales ▪ Intervención Internacional ▪ Naturaleza del conflicto y del grupo rebelde
Allison 2006	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores institucionales ▪ Factores organizacionales (tamaño del grupo y apoyo popular)
Lyons 2005	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motivación del grupo rebelde para la transformación en partido político ▪ Incentivos favorables y oportunidades para la opción democrática
Nasi 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cambios en el régimen político que facilitan la incorporación de los grupos rebeldes a la democracia.
Söderberg 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grado de cohesión interna durante el proceso de paz (<i>factions</i>) ▪ Grado de apoyo popular con el que cuenta el grupo entre la población local (<i>followers</i>) ▪ Grado de reconocimiento y legitimidad que recibe de los actores clave de la comunidad internacional durante el proceso de paz (<i>friends</i>)
De Zeeuw 2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motivación, estructura y liderazgo del grupo rebelde ▪ Tipo de acuerdos a los que se llega para la terminación del conflicto (políticas nacionales, regionales y contexto de seguridad) ▪ Rol que desempeñan los actores internacionales a lo largo del proceso.
Dudouet 2009, 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores contextuales (naturaleza del conflicto y de los acuerdos, provisiones políticas y de seguridad en los acuerdos de paz, contexto posguerra) ▪ Características del actor (cohesión interna, motivaciones políticas y experiencia, legitimidad social) ▪ Intervención internacional (apoyo diplomático, <i>capacity-building</i>, asistencia al DDR, diálogo inclusivo, garantías y monitoreo).
Grisham 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alteraciones en las necesidades del movimiento rebelde ▪ Grado de acceso político al sistema democrático
Manning & Smith 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Experiencia política previa del grupo rebelde durante la guerra ▪ Intensidad y duración del conflicto armado ▪ Forma como termina la guerra ▪ Contexto político y económico en el momento de la terminación del conflicto.

Fuente: elaboración propia a partir de los autores de la tabla.

Como es evidente en la Tabla 1, los factores explicativos van desde las características del grupo rebelde, la naturaleza de su lucha y el grado de apoyo popular; hasta las condiciones específicas del contexto de la transición, formas de terminación del conflicto y nivel de apertura democrática. Así mismo, la mayoría de las investigaciones han hecho especial énfasis en el rol que ha jugado la comunidad internacional, tanto en tiempos de guerra como en el momento mismo de la transición y la construcción de la paz. A la luz de estos textos, en este artículo se estructuran cuatro bloques tal como se expresa en la siguiente gráfica.

Gráfica 2. Marco de análisis



Fuente: elaboración propia

Factores internos

Hay un punto de la confrontación armada en el que las partes perciben que han llegado a una situación de estancamiento mutuo y los rebeldes encuentran mayores incentivos para competir en el campo electoral que motivos para permanecer en el campo de batalla.

El entorno de las conversaciones de paz de principios de los 90 en países como El Salvador, Guatemala, Mozambique y Colombia con el M-19, resultó favorable para el tránsito de estos grupos a la legalidad. La caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría aceleró las discusiones sobre la pertinencia de la lucha armada y del proyecto político del socialismo en sí, así como cortó el apoyo económico internacional a las guerrillas (Rampf *et al.*, 2014). En varios de estos países se venían adelantando reformas hacia una mayor apertura democrática. Continuar en armas ya no era útil para sus intereses y la competencia electoral se presentaba como una oportunidad para canalizar sus luchas, favoreciendo así acuerdos de pacificación que incluían de manera específica garantías para su transición a la política legal (Lyons, 2005).

Las organizaciones que pese a defender algún tipo de ideología, terminan atrapadas en las economías de la guerra, encuentran mayores dificultades desencadenando transformaciones fallidas, de fachada o fragmentaciones con resultados parciales. Por el contrario, aquellas que se movilizan por una causa común manejan una visión clara del tipo de gobierno que desean y son más proclives a dar este paso. Los grupos de carácter reformista, que buscan democratizar el sistema político y aceptan ser partícipes de las estructuras de gobierno, tienen mayores probabilidades de insertarse dentro del Estado que aquellos con un tinte más revolucionario que

pretenden transformar radicalmente la naturaleza del Estado o provocar una ruptura dentro del mismo. La visión radical les impide aceptar las reglas del juego existentes, produciendo una transición menos exitosa (Dudouet, Planta & Giessmann, 2016).

La ANC/MK tenía un propósito político que orientaba su lucha armada: una forma de acción política para hacer realidad las metas del movimiento de liberación nacional (García-Durán, 2009). En El Salvador, las causas del conflicto respondían a circunstancias estructurales como la carencia de democracia, desigualdades económicas e inequidades en la distribución de la tierra. El FMLN era respuesta a una situación de exclusión y autoritarismo, con fuerte represión y violencia desde la derecha. El grupo fue fiel a las razones políticas de lucha, aglutinó a la gente en torno a estos ideales y su conversión fue exitosa (Lyons, 2005).

En Angola, tanto UNITA como el gobierno del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) pasaron de beneficiarse del patronazgo de la Guerra Fría a la explotación de los recursos naturales para el sustento de la guerra y el mantenimiento de sus clientelas. Los líderes de UNITA señalaban a los diamantes como el “alma” de la organización necesarios para mantenerse. En Sierra Leona era similar. No había un programa político coherente que aglutinara a los rebeldes. La gran mayoría de los combatientes no tenían habilidades políticas y habían sido reclutados con incentivos selectivos. La RUF se había mantenido y fortalecido a través del tráfico ilegal de diamantes que terminaron convirtiéndose en el móvil de la guerra (Söderberg, 2007).

Transitar a la política legal supone adaptarse a las normas y formas de operar del sistema político. Esto resulta más familiar para aquellas organizaciones con experiencia política previa, si las actividades militares han estado subordinadas a un partido político existente, cuentan con un ala política dentro del movimiento, o han establecido gobiernos paralelos en sus zonas de control.

El CPN-M tenía sus raíces en un movimiento político con una clara ideología y contaba con estructuras tanto en el ala política como militar. Durante el proceso de paz fortalecieron sus estructuras políticas, reformaron sus equipos civiles para que se adaptaran mejor al aparato gubernamental y entrenaron a sus cuadros para impulsar la movilización política antes de la búsqueda del poder por vía electoral. Los maoístas pertenecían a una élite educada con una historia de compromiso político y con la capacidad, el interés y el pragmatismo para liderar la transición. Además, el grupo había logrado tener una significativa gobernanza política a escala local mediante la administración de amplios territorios bajo su control (Castillejo, 2016).

Desde antes de las primeras elecciones del posconflicto (1994), el FMLN había empezado a crear estructuras autónomas de “doble cara” para organizarse en algo semiclandestino, semilegal, había estructurado su capacidad política y establecido vínculos con sindicatos y organizaciones de masas urbanas. Los líderes estaban

convencidos en la salida política. Al final del proceso, la insurgencia salvadoreña estaba segura de que podía mantener sus cuadros y avanzar en la agenda política, ganaran o no las elecciones (Söderberg, 2007).

Todo lo contrario ocurrió en Guatemala. A principios de los ochenta la URNG contaba con alrededor de 6.000 a 8.000 combatientes. Para mediados de los noventa esa cifra se había reducido a la mitad. En 1997, 2.940 combatientes armados y 2.813 miembros de apoyo del URNG a nivel internacional y político se desmovilizaron. Muchos de sus líderes desertaron del proceso. Durante la transición, ninguno de sus cuadros estaba entrenado o preparado para participar en la política legal y la competencia electoral (Finn, 2009).

Tomar una decisión lo más unificada posible durante la transición facilita un resultado exitoso. Sin embargo, las oportunidades que ofrece la posguerra no son iguales para todos los miembros, se afecta el balance de poder dentro del grupo y hay diferencias sobre la conveniencia de abandonar las armas. La división más común se da entre la línea “militar-dura” y la línea “política-suave” más proclive a la negociación. Prácticamente todas las conversaciones de paz son negociaciones entre élites. Quienes negocian buscan asegurar una posición favorable en el posacuerdo, beneficios que son menos claros si se mira más abajo de la pirámide. Los mandos medios prácticamente dependen de la organización para mantener sus posiciones de poder y buscarán beneficiarse en ese nuevo contexto. Así mismo, no todos están cualificados para asumir responsabilidades políticas, ni tienen habilidades para la competencia electoral y ven con incertidumbre su futuro en un escenario democrático.

Para finales de la guerra en Mozambique (1992), el grupo estaba centralizado alrededor de su líder, Afonso Dhlakama, en quien recaía prácticamente todo el poder de la organización de forma altamente personalizada. Los mandos medios y altos mandos militares no contaban con un *background* educativo y tenían escasos atributos más allá de los militares. Gracias a sus posiciones se habían beneficiado durante la guerra, pero no visualizaban un futuro lucrativo para ellos en un escenario de transición. Por ello cuestionaron la decisión de abandonar la lucha armada y convertirse en partido político. Sin embargo, Dhlakama y su más cercano círculo de seguidores convencieron a los potenciales saboteadores de permanecer comprometidos con la transformación gracias al acceso a significativas cantidades de dinero, recursos y otros privilegios provenientes de la comunidad internacional. La generosa distribución de los dividendos de la paz ayudó a silenciar las críticas internas mediante un “*buy-off*” de los opositores. Adicionalmente, el acceso a recursos se utilizó para reclutar nuevos líderes y activistas con cualidades específicas de acuerdo con las necesidades para funcionar como partido dentro de la legalidad (Lyons, 2005; Söderberg, 2007).

En El Salvador, las divisiones internas se remontan a los conflictos entre las cinco organizaciones guerrilleras que conformaron el FMLN en 1980. Cada grupo difería en términos de ideología, estrategia y gobierno interno. Sin embargo, contaban con líderes pragmáticos que actuaron de manera cohesionada en gran parte de la guerra y frente al proceso de paz. Dichas diferencias resurgieron durante la transición en forma de fusiones, divisiones internas, deserciones individuales y fracturas colectivas. Sin embargo, la estrategia de alianzas y pragmatismo interno hacia un liderazgo cohesivo y programa único fue estratégico para la transformación (Söderberg, 2007).

Los rebeldes se caracterizan por ser organizaciones disciplinadas, centralizadas, con un aparato administrativo basado en procesos verticales de decisión. Los cabecillas suelen inducir al personal por debajo de su línea de mando a asumir la trayectoria de cambio, de allí que el rol de los líderes sea decisivo. Sobre ellos recae la misión de mostrar a las bases los beneficios de la paz. Si los líderes están realmente convencidos de que el cambio es positivo será más fácil convencer a los otros. Si no lo están, las probabilidades de éxito son menores (Dudouet, Planta & Giessmann, 2016).

El máximo comandante del M-19, Carlos Pizarro, intuyó que la posibilidad que tenía el grupo de recuperar su protagonismo político descansaba en una propuesta decidida de paz. Sin consultarlo previamente dentro de la organización ni a las otras guerrillas también en proceso de pacificación, se aventuró a hacer una oferta de desarme al gobierno. Su decisión fue posteriormente confirmada internamente a favor del fin de la rebelión armada (García-Durán, 2009).

Nelson Mandela fue crucial para la caída del *apartheid* y el paso de la ANC a la política legal. El líder sudafricano tomó la iniciativa de persuadir al régimen de que negociara con ellos sin consultarle siquiera a sus más cercanos compañeros de prisión por temor a que no lo apoyaran. Hizo una evaluación hábil de la situación y del ánimo de sus compañeros de prisión y confiaba en que los pasos que estaba dando no entrarían en conflicto con las posiciones políticas del ANC y sus aliados (García-Durán, 2009).

Muchos de los observadores de las elecciones de 1993 en Angola, señalaron que UNITA tenía todas las posibilidades de obtener éxito electoral: cadena de mando, sensibilidad por las demandas políticas tanto locales como nacionales, fuerte base social y un líder carismático. El gobierno del MPLA estaba desprestigiado por su manejo del conflicto, la recesión económica y la corrupción. Sin embargo, Jonas Savimbi hizo una campaña con lenguaje amenazante que solo sirvió para intensificar los temores entre los votantes que se debatían entre continuar bajo el régimen del MPLA o entrar en un futuro incierto y potencialmente violento como el que representaba UNITA. Con una diferencia muy estrecha, el triunfo electoral fue para el MPLA. Savimbi declaró fraude inmediatamente, retiró sus

hombres de las Fuerzas Armadas Unificadas y volvió a la guerra. El fin de UNITA como organización armada solo fue posible hasta la muerte de su líder en el 2003 (Lyons, 2005).

En Sierra Leona, Foday Sankohera fue la cabeza visible del movimiento. Un líder carismático, pero déspota que carecía de las habilidades políticas y la experiencia para construir una organización creíble en lo político y militar. Eliminaba del movimiento a quienes amenazaban su liderazgo o iban en contra de sus decisiones. Pese a ello, contaba con fuertes lealtades. Que los soldados del RUF fueran mayoritariamente menores tuvo un profundo impacto en su culto. Le veían como una figura paterna y era admirado dentro del movimiento. La organización se mantuvo unida en gran parte de la guerra por una combinación de miedo, disciplina y falta de alternativas. Durante las negociaciones fueron evidentes los desacuerdos entre Sankoh y otros comandantes con un perfil más educado o profesional. Sankoh consideraba que una opción de repliegue sería más rentable para obtener la victoria militar y tenía dudas sobre un acuerdo de paz. Su detención desde 1997 lo había mantenido fuera de contacto de los acontecimientos sobre el terreno, pero las negociaciones de Lomé en 1999 le devolvieron gran influencia y poder. Sin embargo, su participación en los acuerdos fue más una jugada táctica que sincera, pues aún tenía planes de un golpe militar. No fue hasta después de que este y la mayoría de las otras personas que conducían el RUF fueran puestas en prisión en el año 2000, cuando el grupo intentó su tránsito a partido sin éxito alguno (Söderberg, 2007).

Factores sociales

Más allá de los cambios internos, la supervivencia como partido depende de la capacidad para mantener, aumentar su clientela y convertirla en votos. Las organizaciones que durante la guerra movilizaron colectivos con base en consideraciones étnicas o fueron consideradas como legítimos representantes de los reclamos e intereses de un amplio colectivo social, tienen mayores posibilidades de movilizar los apoyos populares en un contexto democrático. Los grupos que emergen en busca de autodeterminación, la comunidad a la que representan se constituye en un automático soporte electoral. Igual sucede con aquellos que defienden algún tipo de religión o con movimientos revolucionarios que promueven una agenda política inclusiva.

El FMLN era considerado uno de los grupos rebeldes más grandes del hemisferio pues contaba con el apoyo aproximado de unas 50.000 personas. La población estaba aglutinada en torno a temas como la justicia social o el reclamo de tierras. La guerrilla dependía de esa masa social proveniente de las organizaciones campesinas, estudiantes y medias clases urbanas. En sus áreas de control desarrollaron estructuras de gobierno local mediante las cuales educaban tanto a sus cuadros políticos como a los civiles. El reclutamiento fue prácticamente voluntario.

Las adhesiones fueron por afinidad ideológica y ejercieron baja violencia contra la población, algo que contrastaba con la represión promovida por el Gobierno. Este amplio número de apoyos contribuyó a su progresivo éxito electoral y a su consolidación dentro del sistema político salvadoreño (Allison, 2006).

En Guatemala, la URNG pudo haber contado con cierto porcentaje de apoyo, pero a medida que se prolongaba la guerra se fue produciendo un mayor distanciamiento con las bases. Al finalizar el conflicto la guerrilla estaba debilitada y no contaba con suficientes apoyos para ser exitosa en la legalidad (Allison, 2006). Pese a los esfuerzos de la organización por representar al campesinado, falló en movilizar a los grupos indígenas que habían sido victimizados por el régimen y fue incapaz de traducir en votos sus afinidades (Finn, 2009).

Según Kalyvas (2010), el apoyo popular en condiciones de guerra está mediado por una combinación de dinámicas como la manipulación, coerción y oportunismos. Los grupos más sanguinarios contra los civiles con altos niveles de victimización, terminan aglutinando a la gente alrededor del miedo. Este se convierte en un instrumento de intimidación generando afinidades forzadas que no necesariamente se mantienen leales una vez no median las armas. Si el grupo rebelde ha puesto todos sus recursos en la campaña militar dejando de lado el trabajo político, es poco probable que prospere electoralmente. Por el contrario, si se ha preocupado por cultivar las masas populares durante la guerra tendrá mayores posibilidades de éxito en la política legal.

El CPN-M fue siempre consciente de que su existencia dependía del vínculo que mantuviera con la población. Sus actividades militares estaban estrictamente limitadas al ataque de sus oponentes y no perpetraron ataques contra los civiles de manera indiscriminada. El reclutamiento de personas se hacía mediante incentivos sociales en torno a una buena causa, lo que les garantizaba un alto compromiso de sus miembros y disciplina (Klapdor, 2009).

Por el contrario, en Angola la dependencia en los recursos naturales para financiar la guerra llevó a los rebeldes a romper la relación entre lo político y lo militar. Después de 1991, la relación de UNITA con la población fue haciéndose gradualmente más hostil, pues ya no dependía de esta para la provisión de comida y otras necesidades. Igual sucedió en Sierra Leona. Los recursos provenientes de los diamantes reemplazaron el apoyo social. La organización contaba con mala reputación, no solo por la violencia perpetrada contra los civiles, sino por su falta de compromiso en los procesos de paz (Söderberg, 2007).

Conseguir votos mediante la convocatoria política exige nuevas tácticas democráticas diferentes a los viejos métodos de guerra. Es común que en las primeras elecciones del posconflicto persista cierta incertidumbre por el retorno a la guerra si no se obtienen buenos resultados. Los votantes están en el dilema de

si apoyar las nuevas agrupaciones o elegir al candidato que mejor les represente. En general, aquellos partidos que hacen más creíble la pacificación, cuentan con más apoyos electorales (Lyons, 2005).

RENAMO tenía el soporte externo, pero poco apoyo doméstico. A lo largo del conflicto fue haciéndose más dependiente de la población, especialmente la rural. Los mozambiqueños se unían al grupo por una combinación de resignación, ausencia de alternativas o acceso a bienes básicos. En sus áreas de influencia tenían un mayor vínculo con la gente porque se alineaban con los intereses de los jefes tradicionales que estaban en contra de las políticas del régimen. Su éxito electoral respondió en parte al desprestigio del gobierno del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), además del miedo de la gente de que retornará a la guerra. Hay evidencia de un voto táctico, para reforzar el proceso de paz dividieron su voto por FRELIMO en las presidenciales y por RENAMO en las legislativas (Söderberg, 2007).

Factores institucionales

El contexto de la transición y las características del sistema político en el que se incorporan también condicionan el éxito o fracaso del proceso. No todos los conflictos finalizan de la misma manera. Cuando finalizan con la victoria militar de una de las partes, las elecciones de la posguerra sirven para legitimar los resultados obtenidos en el campo de batalla (Lyons, 2005). Las negociaciones de paz aportan una mayor apertura democrática. Los acuerdos crean la oportunidad para introducir ajustes institucionales que favorezcan la incorporación de los insurgentes en el juego democrático. En algunos casos se establece explícitamente la transformación del grupo armado en partido político considerando medidas como amnistías o indultos, fórmulas de favorabilidad para la participación electoral, asistencia económica temporal y cuestiones de seguridad.

Según varios expertos internacionales, ni en el derecho ni en la práctica se conoce de la existencia de ningún ejemplo de negociación exitoso con un grupo rebelde en el que haya habido una prohibición *ex ante* de participación política (Freeman y Giessmann, 2013). Si de lo que se trata es de hacer política sin armas, lo que se negocia son precisamente garantías jurídicas de manera que las obligaciones penales no sean un impedimento para el ejercicio electoral. Las amnistías e indultos han sido la solución comúnmente utilizada, aunque la justicia transicional también ha planteado otras fórmulas como bajas condenas, reparaciones simbólicas, el cumplimiento de la pena en lugares que no sean la cárcel, todo ello con el fin de favorecer la incorporación del grupo a la legalidad, mientras evita la impunidad, garantiza la verdad y la no-repetición.

Las garantías políticas hacen alusión a los ajustes institucionales: reformas al sistema electoral, al sistema de partidos, al ejercicio de la oposición política que son

necesarios para una mayor apertura democrática. El sistema que se instaure debe reducir las desconfianzas entre las partes y proporcionar posibilidades electorales en condiciones de igualdad y seguridad para los candidatos y votantes.

No hay un modelo único que sea garantía de éxito. En el caso de Nepal, los términos de los acuerdos fueron favorables para la conversión de los maoístas en partido político. Se les ofreció una real oportunidad para ganar sillas e influir en la asamblea constituyente, así como para promover profundas reformas dentro del Estado a través de la política (Castillejo, 2016).

En El Salvador se dieron algunas concesiones, pero modestas. El acuerdo de paz estableció específicamente reformas al sistema electoral: abolir el uso de los recursos del Estado para hacer campañas políticas, introducir fondos públicos de manera proporcional a todos los partidos y cambiar la composición del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, se preservaron la mayoría de las reglas del juego, incluida la fórmula electoral preexistente. El nuevo partido prestó escasa atención a aspectos de la ingeniería electoral que pudieron haberle favorecido desde un principio (Nasi, 2007).

En Guatemala, los acuerdos no modificaron las reglas electorales. Se pactaron asuntos relacionados con el código electoral, pero este solo contenía unas pocas sugerencias hacia una mayor transparencia en las urnas y la estimulación de la participación ciudadana. No hubo ninguna concesión para que la URNG se constituyera en partido político una vez firmara la paz. Este debió ceñirse a las normas vigentes que exigían un mínimo de 4.000 firmas como precondition para participar en las elecciones. La paz se firmó en 1996, y no fue hasta dos años después, el 2 de septiembre de 1998, cuando la organización logró demostrar el respaldo de 4.433 seguidores (Nasi, 2007).

Otra receta favorable ha sido la introducción de medidas temporales de favorabilidad política para facilitar la participación de estos grupos en las primeras elecciones posacuerdo o para ser parte de las instituciones de transición. Estas medidas de “discriminación positiva” son útiles para compensar el desbalance de poder entre los grupos que se incorporan y los partidos ya existentes. Dentro de estas acciones afirmativas se encuentran un sistema de cuotas o la reserva de sillas en el gobierno, el parlamento o las asambleas departamentales, las administraciones locales, el cuerpo diplomático o dentro de empresas públicas (Dudouet, Planta & Giessmann, 2016).

En el marco de las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia en los años noventa se discutieron reformas a la ley electoral, pero se acordó que estas no se pactarían de manera *ad hoc* con los rebeldes, sino que se discutirían y votarían en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) elegida popularmente la cual se encargaría de redactar una nueva Constitución. El gobierno le ofreció al M-19 condiciones favorables para participar en la ANC y en el caso de las

organizaciones que se desmovilizaron posterior a dichas elecciones (el Ejército Popular de Liberación - EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame – MAQL), se logró que se asignaran cuatro curules adicionales en esta entidad (Nasi, 2007).

Por otro lado, el grupo debe cambiar los medios de financiación, renunciar al acceso de recursos provenientes de actividades ilícitas y buscar la manera de financiarse en la legalidad. De allí que las garantías económicas que logre pactar, así como el apoyo financiero de otros actores como empresarios o agentes internacionales resulta imperativo.

A diferencia de Angola o Sierra Leona, en Mozambique no había diamantes que alimentaran la guerra. Los líderes de RENAMO tenían claro que los recursos seguían siendo necesarios para operar en el nuevo contexto de competencia electoral. Durante las negociaciones trataron de extraer beneficios de aquellos que estaban interesados en financiar la paz. Países como Italia y otras empresas privadas con intereses en el país fueron determinantes. El representante especial de las Naciones Unidas, Aldo Alejo, señaló que era necesario ayudar a RENAMO a alcanzar un mínimo nivel de funcionamiento. La guerrilla insistía en que no era posible una democracia sin dinero y si se quería alcanzar la paz era necesario asumir ese coste (Lyons, 2005).

Finalmente, las garantías de seguridad son una cuestión de peso para abandonar definitivamente las armas. La vía democrática se contempla como alternativa real cuando el desarme no supone un riesgo para la vida o integridad de los combatientes ni para sus aliados políticos y sociales.

El caso de la Unión Patriótica (UP) en Colombia, el partido político formado en 1985 por la guerrilla de las FARC-EP en el marco de las negociaciones de paz de aquel entonces, es una de las experiencias más dramáticas en este sentido. La UP se presentó como un movimiento político amplio, democrático y de oposición a los partidos tradicionales, atractivo para quienes esperaban importantes cambios en el orden político y social. Durante la primera incursión electoral en 1986 tuvo gran acogida entre la izquierda democrática. Pero el éxito electoral vino acompañado de una sistemática arremetida contra su militancia proveniente de paramilitares, el crimen organizado al servicio del narcotráfico y algunos miembros de la Fuerza Pública. Para 1991, la violencia política había diezmado a los principales partidos de izquierda en el país (Nasi, 2007).

La entrada en el juego de un nuevo actor representa cambios en la distribución de poder del sistema político al que se integran, representa una amenaza para las cuotas de poder establecidas enfrentándose a situaciones de resistencia y exigiendo cierto grado de apertura entre los opositores. Es más fácil obtener concesiones cuando el poder político es controlado por un solo partido, que en contextos

pluripartidistas donde ninguna agrupación es lo suficientemente fuerte para asumir una posición dominante (De Zeeuw, 2008).

La élite dominante del Congreso guatemalteco no estaba preparada para compartir el poder con la insurgencia ni para adelantar un paquete de reformas bajo los términos de los acuerdos de paz de 1996. En parte por ese escepticismo, el marco constitucional diseñado para facilitar la implementación de los acuerdos de paz fue rechazado por voto popular a través del referendo en 1999, justo una semana después de que la URNG se registrara como partido político. Esto afectó negativamente al éxito del movimiento evidenciado en los pobres resultados electorales (Nasi, 2007).

Detrás de la “fachada democrática” que defendía las autoridades salvadoreñas de los años sesenta había un régimen oligárquico-militar que actuaba según sus propias reglas: fraudes electorales, exclusión de la oposición del proceso de toma de decisiones y el exilio de los principales opositores. A partir de las elecciones de 1989, se empezaron a vislumbrar algunos cambios. Presiones externas de las élites económicas hicieron que la candidatura del partido de ultraderecha, ARENA, pasara de Roberto d’Aubuisson (un conservador recalcitrante asociado a los “carteles de la muerte”) a Alfredo Cristiani que tenía una actitud más moderada. Aun cuando dicho partido volvió a ganar las elecciones, la llegada de este nuevo líder dotó de mayor flexibilidad al régimen dando cabida a la oposición y permitiendo la participación de la izquierda en futuras contiendas electorales (Lyons, 2005).

La Constitución colombiana de 1991 introdujo reformas importantes en el sistema electoral y de partidos, apostando por un sistema proporcional tendiente a favorecer, o al menos no desfavorecer, a las fuerzas políticas pequeñas beneficiando así a los partidos nacientes. Sin embargo, las élites tradicionales mostraron una impresionante habilidad de adaptación a las nuevas reglas del juego y mantuvieron intacta su hegemonía política. La Carta Política no logró cambiar las matrices excluyentes de la cultura política colombiana asentada en una sólida maquinaria electoral, clientelismo y desigual financiamiento de campañas (Rampf *et al.*, 2014).

Factores internacionales

Dentro de los factores internacionales se consideran tanto el grado de legitimidad internacional de los rebeldes en el momento de la firma de los acuerdos como el rol de la comunidad internacional durante la pacificación.

El conflicto salvadoreño se desarrolló en el marco de la Guerra Fría. Varios países del ala comunista condenaban la política de represión del gobierno y las élites políticas y apoyaban al FMLN porque consideraban que sus reclamos respondían a una mejora de las condiciones de vida de la población. La identificación con los incentivos colectivos de la guerra favoreció la legitimidad del grupo

en la legalidad. El ambiente mundial de la época también fue propicio para la terminación del conflicto. El fin de la Guerra Fría, las negociaciones en Nicaragua, el cambio de administración en Estados Unidos de Reagan a Bush y las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ambientaron la transición (Lyons, 2005). La comunidad internacional jugó un papel de garante de los acuerdos de paz. Fue especialmente relevante el papel de Estados Unidos, que durante la guerra había apoyado al gobierno salvadoreño en su lucha contrainsurgente, pero en el momento de la transición ejerció presión al Gobierno para que se comprometiera y cumpliera los acuerdos de paz (Söderberg, 2007).

El apoyo de la comunidad internacional en los casos de Mozambique y El Salvador fue crucial. Dentro del mandato de la ONUMOZ estaba el monitoreo del cese al fuego y la desmovilización de FRELIMO y de RENAMO, la creación de fuerzas unificadas nacionales y de policía, la remoción de minas, la reconstrucción de la infraestructura básica, el retorno de los refugiados y de la población desplazada y el soporte a las elecciones. Aun cuando hubo debilidades en la misión en términos de tiempo, la comunidad internacional creó un fondo de 19 millones de dólares para apoyar la transformación de RENAMO en partido político (Lyons, 2005). A diferencia de la experiencia salvadoreña, el soporte de la comunidad internacional no respondía a un reconocimiento de las causas de lucha, ni a un reconocimiento de RENAMO como actor político legítimo, sino a un pragmatismo político claro de acabar con la guerra y dar paso a una democracia multipartidista de la mano de la liberalización económica del país (Söderberg, 2007).

En Sierra Leona en cambio, cuando la RUFF se intentó consolidar como partido no recibió las ayudas que se le prometieron en los acuerdos. Algo similar sucedió en Camboya. La comunidad internacional primero dio cierto impulso para que se produjeran las negociaciones de paz, pero luego asumió una actitud de deslegitimación del Khmer Rouge. La coalición de gobierno vencedora en las elecciones recibió todo el apoyo internacional haciéndole entender al KR que era posible avanzar en la paz sin ellos (Söderberg, 2007).

3. Vicisitudes del tránsito a las FARC

No es objeto de este artículo desarrollar a profundidad la reciente conversión de las FARC-EP en partido político, algo que ya se ha trabajado en otros textos (Zambrano-Quintero, 2019; Cabrera y Echandía, 2019); sino valerse de los espejos internacionales expuestos para esbozar algunas de las vicisitudes a las que se enfrenta el naciente partido.

Desde el punto de vista *interno*, su principal desafío ha sido mantener la unidad. La guerrilla llegó a la firma del acuerdo de paz de manera cohesionada, tanto a nivel de sus mandos como de sus bases. Ello les permitió avanzar de forma más

o menos compacta en la dejación de las armas y la conformación del partido. Sin embargo, con el paso del tiempo se presentaron problemas que derivaron en fracturas internas.

Una primera grieta se dio al nivel de la dirigencia del partido. Si en otras experiencias las tensiones se presentaron entre un ala política y un ala militar, en este caso las discrepancias se dieron en torno a la orientación ideológica que debía asumir el nuevo partido: entre una línea más reformista, abierta y democrática liderada por el actual dirigente del partido, Rodrigo Londoño; y otra más radical apegada al marxismo-leninismo que abogaba por ser fiel a los ideales de lucha. Este debate programático produjo una división que derivó, por un lado, en el rearme de dos de sus principales negociadores: Iván Márquez y Jesús Santrich, argumentando lo que denominaron “perfidia en la implementación de los acuerdos de paz por parte del Gobierno colombiano”¹. Por el otro, en la renuncia al Partido de varios de sus miembros y el surgimiento de una nueva facción política liderada por reconocidos jefes como: Fabián Ramírez, Omaira Rojas (alias Sonia) y Andrés París. Estos últimos señalaron que las FARC pasaron a ser un partido totalmente institucional y que de la revolución que pregonaban ya no queda nada. Le critican a Timoleón su falta de arraigo y autoridad sobre las bases, la ausencia de lucidez ideológica y política, así como su actitud fácilmente seducible, cooptable o influenciabile, lo que hace necesario marcar una posición radical contra la actual dirección del partido².

Una segunda grieta, se presentó entre la dirigencia del partido y sus bases. Se reprocha que el partido FARC abandonó su “guerrillerada” de base descuidando sus cuadros políticos. Pese a los esfuerzos de mantener el colectivo, los beneficios de la paz no se distribuyeron equitativamente entre todos sus miembros. Gran parte de los proyectos productivos previstos en el marco de ECOMUN³ no están en marcha, y los que están operando se dice que son cercanos a la dirigencia del partido. De allí que un grupo de exguerrilleros, muchos de ellos mandos medios que dicen representar a más de dos mil excombatientes, se organizaron en una nueva corporación (Corporeconciliación) para hacer su reincorporación al margen del partido y por fuera de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación.

La tercera grieta se evidenció en las disidencias. Al primer grupo de Gentil Duarte del Frente I de las FARC-EP en el sur del país, se sumaron nuevas deserciones producto de la dilación e incumplimientos en la implementación de los acuerdos, de las controversias jurídicas y las amenazas a la seguridad que aumentaron la incertidumbre y desconfianza de gran parte de los exguerrilleros en los territorios.

¹ Ver video en YouTube el 29 de agosto de 2019: <https://www.youtube.com/watch?v=EeCs8cGtNUs>

² En noviembre de 2019 se dieron a conocer dos cartas firmada por 71 militantes que renunciaron al partido con fuertes críticas a la dirección nacional. Ver: <https://caracol.com.co/descargables/2019/11/14/44241b508258adaea7156f03aa490baa.pdf>

³ La cooperativa que se planteó en el acuerdo como la principal canalizadora del dinero que le da el Gobierno a los exguerrilleros para tener una actividad económica.

Se reclaman diferencias entre la estrategia de protección de los cuadros de las FARC. Mientras los comandantes, hoy en día políticos, gozan de protección, la mayoría de los excombatientes asesinados, fundamentalmente de las bases, no cuentan con las mismas garantías de seguridad.

Por el momento, la transformación de las FARC-EP ha sido “parcialmente” exitosa. El grupo se ha desarmado, constituido en partido político y participado en elecciones. Pero lo que realmente está en juego es su supervivencia en el tiempo como opción política, lo cual depende fundamentalmente de su fortaleza electoral derivada del *apoyo social*. Las primeras experiencias no han sido alentadoras. En las legislativas del 2018, solo tuvo el apoyo del 0,34 % del electorado para Senado y 0,21 % en Cámara de Representantes. En las territoriales del 2019, únicamente sacaron dos concejales propios y ni un solo diputado en todo el país. Lanzaron 16 candidatos a alcaldías y ninguno fue elegido. En total sacaron 71.850 votos por lo que mantener su personería jurídica después del 2026 no está asegurada. Las FARC descubrió que no era “el ejército del pueblo”, que no contaba con el soporte de la población en sus territorios de influencia y que las fuerzas democráticas de izquierda preferían mantenerse alejadas del naciente partido, pues su coalición representaba más una resta que una suma en materia electoral.

En términos *institucionales*, la salida negociada del conflicto, así como la inclusión en los acuerdos de consideraciones específicas para la conversión de las FARC-EP en partido político fue determinante para la transición. Sin ello, no hubiese sido posible que la guerrilla una vez desarmada fuera reconocida como partido político y se integrara inmediatamente al sistema democrático con puestos en el parlamento sin cumplir los requisitos para tener asiento en dicha corporación.

Pero más allá de llegar a acuerdos, lo importante es que se cumplan. La implementación ha sido lenta, por no decir que es escasa la voluntad política para materializar lo acordado (Zambrano, 2018). Los pocos avances que se han visto están lejos de la integralidad y las reformas estructurales pactadas. La decisión de la antigua guerrilla de cumplir con lo acordado contrasta con el cumplimiento parcial y selectivo, incluso de tendencia al incumplimiento por parte del Estado. Esto no solo ha resquebrajado la unidad de las FARC, sino que no ha favorecido el acatamiento de las garantías jurídicas, políticas, económicas y de seguridad necesarias para transitar a la legalidad.

La violencia no desapareció con el acuerdo de paz. La continuación de las economías ilícitas, la presencia activa de otros grupos armados ilegales en los territorios, las disidencias y el rearme, y el hecho de que el vacío dejado por las FARC-EP fuese llenado por bandas ilegales y no por el Estado, representa una amenaza para el ejercicio de la política sin armas. No están dadas las garantías de

seguridad para la participación política de las FARC, ni de cualquier otro partido o movimiento social y político de oposición.

Bajo estas circunstancias, la *comunidad internacional* ha sido una aliada incondicional. No solo ha arropado las conversaciones de La Habana, sino que ha ayudado a distensionar varios de los momentos delicados del proceso. Su apoyo se ha convertido en una prenda de garantía y en un instrumento de presión para que se cumpla lo pactado y se avance en la implementación de los acuerdos.

Aún es prematuro valorar el éxito de la conversión de las FARC. Es un proyecto que necesita consolidarse, fortalecerse como opción política y capitalizar su presencia democrática. Está por verse si como en el caso salvadoreño logra superar la fragmentación interna e ir acumulando posiciones de poder local hasta dar el salto a escala nacional. O si como en el caso guatemalteco o del M-19, no consigue el suficiente apoyo electoral al punto de quedar relegada de la competencia democrática, desaparecer como partido, o terminar impulsando propuestas por fusión o intermediación de otros partidos y de algunas individualidades. Eso sí, para consolidarse en la arena política legal serán tan importantes las decisiones que como sujeto en transformación adopten, como las condiciones de apertura democrática y ajustes en las reglas del juego del sistema político colombiano.

Referencias bibliográficas

- Allison, M. (2006). The transition from armed opposition to electoral opposition in Central America. *Latin American Politics and Society*, 48(4), 137-162.
- Cabrera, I. y Echandía, C. (2019). Retos institucionales y no institucionales para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en las elecciones legislativas de 2018. *Estudios Políticos*, 56, 92-121.
- Castillejo, C. (2016). *The role of ex-rebel parties in building peace*. NOREF.
- De Zeeuw, J. (2008). *From soldiers to politicians: transforming rebel movements after civil war*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Dudouet, V. (2009). *From War to Politics: Resistance/Liberation Movements in Transition*. Berghof Report (15), Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Dudouet, V., Planta, K. & Giessmann, H. (2016). *The Political Transformation of Armed and Banned Groups Lessons Learned and Implications for International Support*. Berlin: Berghof Foundation, United Nations Development Programme.
- Finn, D. (2009). *Transformation of rebel movements into political parties in transitions from civil conflict: A study of rebels' decision making amid violence in El Salvador and Zimbabwe*. Electronic Theses and Dissertations. 199. Retrieved from <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=etd>
- Flórez, E. y Valenzuela, P. (1996). De la oposición armada al frustrado intento de alternativa democrática en Colombia. *Colombia Internacional*, 36, 31-40.
- Freeman, M. y Giessmann, H. (2013). *Proceso de Constitucionalidad D-9808-9819 acumulado. Diciembre 4*. Recuperado de <https://www.ifit-transitions.org/files/documents/amicus-submission-to-the-colombian-constitutional-court.pdf>

- García-Durán, M. (ed). (2009). *De la Insurgencia a la Democracia: Estudios de caso: Colombia, Sudáfrica, Irlanda Del Norte, Aceh, Nepal, Sri Lanka*. Bogotá: Cinep.
- Kalyvas, S. (2010). *La lógica de la Violencia en la Guerra Civil*. Madrid: AKAL.
- Klapdor, D. (2009). *From rebels to politicians: Explaining rebel to party transformations after civil war: The case of Nepal*.
- Lyons, T. (2005). *Demilitarizing Politics: Elections on the uncertain road to peace*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Maharaj, M. (2008). *The ANC and South Africa's negotiated transition to democracy and peace*. Berlin: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management. Retrieved from https://www.berghof-foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Papers/Transitions_Series/transitions_anc.pdf
- Manning, C. (2007). Party-building on the Heels of War: El Salvador, Bosnia, Kosovo and Mozambique. *Democratization*, 14(2), 253-272.
- Manning, C. & Smith, I. (2016). Political party formation by former armed opposition groups after civil war. *Democratization*, 23(6), 972-989.
- Nasi, C. (2007). *Cuando callan los fusiles: impacto de la paz negociada en Colombia y en Centroamérica*. Bogotá: Norma.
- Ogura, K. (2008). *Seeking state power: The Communist Party of Nepal (Maoist)*.
- Rampf, D., Llano, M., Castillo, D., Chavarro, D., Ramos, C.G., López, R.O. y Quintero, A.C. (2014). *Renunciar a la opción armada. Experiencias de reintegración política de grupos insurgentes en Colombia y El Salvador*. Bogotá: Cinep - Fundación Berghof.
- Söderberg, M. (2007). *From rebellion to politics. The transformation of rebel groups to political parties in civil war peace processes* (doctoral thesis). Uppsala Universitet, Uppsala, Sweden.
- Söderberg, M. & Hatz, S. (2016). Rebel-to-Party transformations in civil war peace processes 1975-2011. *Democratization*, 23(6), 990-1008.
- Zambrano, L. (2018). Ajustes institucionales para facilitar la participación política de la FARC. *Memoria 56° Congreso Internacional de Americanistas*. Salamanca. 188-198.
- Zambrano-Quintero, L. (2019). La reincorporación colectiva de las FARC-EP: una apuesta estratégica en un entorno adverso. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (121), 45-66.